



Dirigencia docente

Debe ser triste para muchos profesores comprometidos genuinamente con la educación, observar la situación actual del colegio profesional llamado a representarlos. Una reciente entrevista a su actual presidente, Mario Aguilar, en "El Mercurio", da cuenta de una conducción que privilegia la defensa corporativa de ciertas reivindicaciones y la promoción —bajo el eufemismo de "transformaciones profundas"— de una agenda radicalizada. La preocupación por los aprendizajes de los estudiantes y por el estancamiento —y aun retroceso— que revelan las mediciones internacionales no parece estar en su radar. Menos aún se hace responsable del impacto que las paralizaciones docentes generan en la educación y, particularmente, en aquella a la que acceden los sectores más vulnerables.

Aguilar no esconde su crítica al desempeño del actual gobierno en el área educacional, pero ella no apunta precisamente al estancamiento en los aprendizajes, sino a una falta de lo que llama cambios radicales en el funcionamiento del sistema. ¿A qué alude? En su trayectoria, el dirigente ha dado luces, criticando el sistema de *vouchers* —es decir, la entrega de una subvención por alumno— y la preocupación por los *rankings*. Se trata de una mirada refundacional que se aparta de los anhelos de la gran mayoría de padres y apoderados, que valoran la libertad de elegir la educación de sus hijos. Aguilar cuestiona también la pasividad de los movimientos sociales durante la actual administración. "El movimiento social siempre tiene que estar activo, en movilización, presionando por cambios y por sus demandas. Y eso durante este gobierno existió poco", sentencia, revelando una concepción

que parece hacer de la movilización un objetivo en sí mismo.

Consecuente con esa mirada, el dirigente tuvo un papel protagónico en los días del estallido, como parte de la Mesa de Unidad Social, entidad que llamó a masivas protestas, sin hacerse cargo ni de la violencia que esas protestas significaron, ni de cómo ese estado de movilización permanente golpeó a la educación. Por eso poco extraña que luego, durante la pandemia, tanto bajo su conducción como especialmente bajo la del dirigente Carlos Díaz —que lo sucedió por un período—, el Colegio se transformara en el mayor obstáculo para la reapertura de las escuelas.

Preocupante es que aún hoy, cuando desde distintos sectores se admite el inmenso costo que significó para los estu-

diantes haber demorado el retorno a clases, el presidente de los profesores descarte cualquier autocrítica. Y es que la despreocupación que muestra el Colegio respecto de los efectos que la pérdida de clases significa para los estudiantes llega a niveles extremos. De hecho, Aguilar defiende las movilizaciones, apelando al derecho a huelga —reconocido constitucionalmente y regulado por la ley— para justificar paralizaciones que se apartan de toda legalidad y que, usadas arbitrariamente como instrumento de presión, vulneran el derecho a la educación de niños y jóvenes.

En la última elección del gremio docente, la participación llegó apenas al 36%, de un total de 42 mil 200 habilitados para votar; esto, cuando el total de profesores en el país se calcula en unos 250 mil. Parece una muestra elocuente de la insatisfacción de muchos ante el derrotero que los dirigentes le han impuesto a su organización gremial.

La despreocupación por la pérdida de clases llega a niveles extremos.